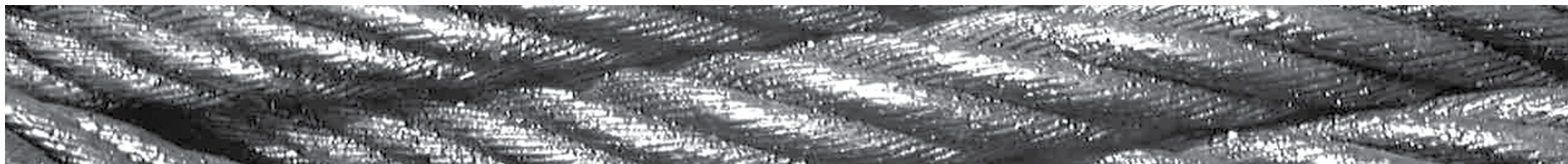




- Colombia-Venezuela: una despedida a la Uribe
- EEUU: justicieros del déficit
- El agua ya es un derecho humano



En busca del casillero perdido

Roberto Bissio

En 1992, en un trabajo publicado meses después de su muerte trágica, el economista chileno Fernando Fajnzylber elaboró un cuadro que ordenaba de mayor a menor a los países latinoamericanos según dos criterios: el crecimiento económico y la desigualdad. Una vez que cada quien fue ubicado según la combinación de estas dos variables, un casillero quedó vacío: el que combinaba alto crecimiento con baja desigualdad.

Según el índice de desigualdad ideado en 1912 por el estadístico italiano Corrado Gini, América Latina es la región más desigual del mundo, con un valor promedio de 0,53 en 2009. Venezuela, Uruguay y Costa Rica, los países menos desiguales de América Latina, tienen un coeficiente de Gini mayor que el de Estados Unidos, el país más desigual de los considerados “desarrollados”, y son más desiguales que cualquiera del Medio Oriente o del norte de África.

Casi dos décadas después del diagnóstico de Fajnzylber sobre la falta de correlación entre crecimiento y equidad, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas acaba de publicar su

Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010, en el que se analiza la economía de cada país de la región y del conjunto. En momentos en que el mundo está conmovido por la crisis financiera y económica, el desempeño latinoamericano es espectacularmente bueno.

En palabras de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL: “En América Latina y el Caribe, la banca no colapsó, los créditos hipotecarios siguieron su curso normal, los activos tóxicos no constituyeron un aporte al vocabulario doméstico, las compañías de seguros han respirado con tranquilidad. Los gobiernos no tuvieron que salir presos del pánico a salvar a los bancos privados y los niveles de déficit fiscal se han mantenido en umbrales de gran responsabilidad. A diferencia de crisis anteriores, esta vez los países de la región no han sido parte del problema, sino parte de la solución, y han dado muestras contundentes de responsabilidad fiscal, de sobriedad financiera, de preocupación por las personas”.

Sin embargo, la CEPAL señala que el casillero sigue vacío y ningún país latinoamericano ha logrado

aún combinar alto crecimiento con equidad.

En el período que analiza el informe, la crisis obligó a los gobiernos a “impulsar medidas de diverso tipo a fin de amortiguar los efectos negativos sobre la actividad económica y la situación social” y con ello “ha revalorizado el rol del Estado y de las políticas activas”. El problema, ahora, es “la capacidad para llevar adelante estas políticas”, “ampliar el espacio de las políticas públicas”, garantizar la disponibilidad de los recursos y fortalecer a las instituciones que deben implementarlas.

En vez de complacerse con la desgracia ajena, la CEPAL toma como tema de su informe el impacto distributivo de las políticas públicas. El alto crecimiento económico actual de la región se desacelerará a partir de los últimos meses de 2010 y sin duda en 2011, sostienen los expertos, como consecuencia de diversos factores externos. En ese marco, es necesario “mantener políticas públicas que apunten a la protección de los sectores más vulnerables” dentro de una “estrategia más amplia, que abarque no sólo el área social, sino también las políticas macroeconómicas

y productivas, de modo de permitir que los países de la región alcancen un desarrollo más inclusivo.

El informe de CEPAL constata el fracaso social de las políticas económicas de la década pasada: “Existía la expectativa de que las reformas económicas, sobre todo la apertura comercial y financiera, así como la desregulación de los mercados laborales, favorecerían el uso del factor más abundante, presumiblemente el trabajo con menor nivel de calificación, lo que aumentaría su empleo e ingresos”. Sin embargo, “el dictamen de la evidencia empírica ha sido desfavorable para esta hipótesis” y se constata una ampliación de la brecha entre los ingresos de las elites y de quienes tienen educación media o baja. La brecha salarial entre hombres y mujeres, similarmente, dejó de achicarse.

Que el mercado no haya solucionado el problema no quiere decir, sin embargo, que cualquier intervención estatal sea buena. Hay que seguir asegurando la estabilidad macroeconómica, sostiene el informe, pero ésta debe acompañarse de equidad en los impuestos, con mayor aumento del impuesto a la renta y disminución del IVA, reducción de la evasión fiscal y de la informalidad.

La CEPAL informa que la nueva tendencia latinoamericana es a canalizar mayores recursos hacia los sectores más pobres. Se reconoce ahora el papel del desarrollo social en la potenciación del desarrollo productivo y el crecimiento económico, y se observa una tendencia clara al aumento del gasto público social. Se propone, entonces, “una concepción de igualdad de derechos, no sólo de igualdad de oportunidades”.

El casillero no debe seguir vacío otra década. ■

Radiografía de la desigualdad. La desigualdad secular hunde sus raíces en nuestra historia, sostiene la CEPAL, y se remonta a los tiempos coloniales y la época republicana. Finalmente, el patrón de desarrollo y modernización perpetuó las brechas socioeconómicas basadas en el origen racial y étnico, la clase social y el género. La estructura productiva y las oportunidades educativas siguen reproduciendo la desigualdad.

El diez por ciento de los hogares latinoamericanos más ricos concentra un treinta y cinco por ciento de los ingresos totales. En Uruguay y Venezuela la participación del decil superior baja al veintiocho por ciento de los recursos totales, pero en Brasil y Colombia ésta supera el cuarenta por ciento. En el otro extremo,

el cuarenta por ciento de los hogares de menores ingresos capta en promedio apenas un quince por ciento del ingreso total, alcanzando los valores más bajos en Honduras, República Dominicana y Bolivia, donde no excede el once por ciento.

La desigualdad también es territorial. Con la excepción de los países centroamericanos de menor tamaño y de Uruguay -con mejores indicadores de equidad, menor tamaño y organización unitaria del Estado-, las brechas geográficas son muy altas y superan a las de cualquier país europeo. Por ejemplo, mientras que en Europa el PIB per cápita de la jurisdicción más rica casi duplica el correspondiente a la zona de menor ingreso de ese mismo país, en América Latina esta relación es de seis veces. ■

No podía ser de otra manera. Antes de dejar la Presidencia de Colombia (el 7 de agosto), Álvaro Uribe necesita saldar algunas cuentas. Cuando apostó a denunciar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) la supuesta presencia de las FARC en Venezuela, descontaba la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas como respuesta. Es el portazo de despedida a ocho tormentosos años de relación con Hugo Chávez, cuyo análisis requiere de psicólogos, además de politólogos, geoestrategas y expertos en asuntos internacionales.

A un lado y otro de la frontera más viva y porosa de América Latina ha habido una constatación de lo que es el yin-yang: dos gobernantes opuestos e iguales, autoerigidos ambos en la respuesta personal a los problemas de sus países y que han tenido en la conducta del otro un alimento para sus políticas internas. El opuesto complementario.

Es tan así que, antes de dejar el gobierno el 7 de agosto, Uribe le hizo un último favor a Chávez: le limpió la agenda de temas altamente incómodos y desgastantes, para galvanizarla en el conflicto, lo que más gusta al antiguo teniente coronel, y en torno a una agresión de Colombia, que siempre le funciona para cohesionar a sus adeptos.

En medio quedaron el futuro presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se ha movido desde su triunfo electoral de manera que diluye el calificativo de delfín de Uribe, los cinco millones de habitantes de la frontera, la OEA y hasta Diego Maradona, que justo visitaba a Chávez cuando éste anunció la “ruptura total de relaciones” con Bogotá.

Hay quienes dicen que Uribe ha hecho el papel de “policía malo” para dejar que Santos sea el “policía bueno”

Una despedida a la Uribe

Estrella Gutiérrez

con Venezuela, recomponiendo a la mayor velocidad posible los nexos con el gobierno de Chávez, y hacerlo a plenitud, porque de hecho las relaciones ya estaban congeladas y las comerciales directamente bloqueadas. Pero otros aseguran que hay en ella visibles grietas y subrayan que Uribe sobre todo está facturando a Santos actuaciones que éste asumió tras asegurarse la Presidencia.

Y varias de las acciones que han disgustado mucho a Uribe tienen que ver con Venezuela, precisamente. Entre sus primeros anuncios, Santos designó como ministra de Relaciones Exteriores a María Ángela Holguín, quien fue embajadora en Caracas en la efímera e inicial buena etapa de la relación de Uribe con Chávez, y con la que acabó muy enfrentado. El presidente electo dejó saber, además, que para embajador en Caracas piensa en Luis Garzón, un dirigente de izquierda y opositor a Uribe. Al mismo tiempo, su equipo adelantó contactos con representantes del gobierno y de empresarios de Venezuela y de la zona fronteriza, para tratar de avanzar aceleradamente hacia la normalización de las congeladas relaciones económicas.

Chávez decidió el 28 de julio de 2009 suspender las relaciones bilaterales tras la denuncia de Bogotá de que Caracas había desviado armas

hacia las FARC, en medio de la tensión por el anuncio de Uribe de un acuerdo con Estados Unidos para su uso de siete bases militares.

Esta vez, el presidente venezolano ordenó, además, “llevar a cero” las relaciones económicas con el vecino país. Lo que parecía parte de la cíclica retórica inflamada sobre Colombia es casi un hecho. Por vez primera en medio siglo, Colombia bajó de segundo a cuarto socio comercial y las compras venezolanas al vecino cayeron verticalmente: sesenta y nueve por ciento, entre mayo de 2009 y mayo de este año. El ya antes disminuido intercambio pasó de 2.500 millones a setecientos setenta y dos millones de dólares entre enero y mayo. Los empresarios colombianos hablan de un “bloqueo económico”, que se tradujo en un punto porcentual del PIB de ese país y la pérdida de 42.000 empleos.

También a Venezuela le agudizó sus problemas de suministro. Pero sobre todo noqueó a las regiones fronterizas que viven del comercio bilateral en una especie de “tercer país”. En los departamentos fronterizos colombianos, el voto por Santos fue abrumador; en buena parte por la esperanza de que recomponga la economía de la zona, que depende del comercio con Venezuela.

Se suele circunscribir la biografía pública de Santos a su papel como

ministro de Defensa del gobierno de Uribe entre 2006 y 2009, al bombardeo en 2008 del campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y a otras acciones de la polémica política de seguridad. Pero es también impulsor de la era más dinámica en las relaciones económicas binacionales, como ministro de Comercio Exterior (1991-1993). Junto con su colega venezolano Miguel Rodríguez hizo renacer la Comunidad Andina y alcanzó un pionero acuerdo de libre comercio con México, dentro del Grupo de los Tres. Además, trabajó a favor de los vínculos bilaterales como ministro de Hacienda (2000-2002) y trenzó entonces nexos con amplios sectores venezolanos, con las cámaras de comercio binacionales y con las asociaciones de regiones fronterizas.

La denuncia del 22 de julio ante la OEA sobre la supuesta presencia consentida de mil quinientos guerrilleros colombianos en Venezuela trastoca todo el esfuerzo de Santos para normalizar con urgencia el flujo comercial y mejorar el entendimiento con Caracas.

Uribe sale forzosamente de la Presidencia porque la Justicia consideró inconstitucional su tercera candidatura consecutiva. La autonomía de Santos es un golpe a cualquier intención de seguir moviendo los hilos del presidencial Palacio de Nariño.

Para Chávez, el impacto de la denuncia está casi amortizado. Uribe mismo y su gobierno ya habían entregado en las presidencias y cancillerías de América Latina y otros países de fuera de la región documentación sobre la supuesta colaboración de Caracas con las FARC, que dice haber recogido en el destruido campamento de las FARC en Ecuador. Además, el impacto mediático de la reunión del día 22 en la OEA quedó neutralizado por la inmediata ruptura “total” de las relaciones, que hizo más inútil el pedido de una comisión de verificación, sólo posible si los dos países la aprueban.

En el plano interno venezolano, sus opositores ya tienen mayoritariamente como cierto lo denunciado por Uribe. Pero al gobierno le da oportunidad de volver a situar la agenda, que desde abril y por primera vez en años era ajena a los temas marcados por el presidente. Los puntos dominantes eran la negligente pérdida de por lo menos 120.000 toneladas de alimentos importados por el gobierno, con un costo de más de 7.000 millones de dólares, la caída del PIB en torno a seis por ciento y la inflación anualizada de treinta por ciento en el primer semestre, la escasez de alimentos y una altísima inseguridad ciudadana.

Ahora Chávez retoma la iniciativa con la primera ruptura formal de las relaciones con Colombia desde 1901, algo vital con vistas a las cruciales elecciones legislativas del 26 de setiembre, cuando el presidente venezolano tiene el menor respaldo popular desde 2002. (IPS) ■

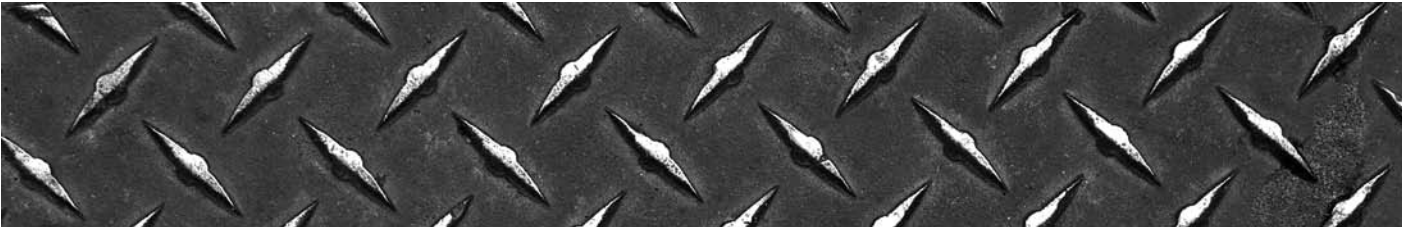
¿Era necesario? Es la pregunta que parece hacerse todo el mundo. ¿Por qué un presidente a punto de irse denuncia al gobierno de un país vecino? Esta inusual conducta de Álvaro Uribe ha llamado la atención de la prensa y la comunidad política internacional, desde el presidente brasileño hasta la revista británica *The Economist*, pasando por la propia prensa colombiana.

“Lo que me pareció extraño es que esto ocurre a pocos días de que el compañero Uribe deje la Presidencia”, declaró Luiz Inácio Lula da Silva y subrayó que el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, “dio señales claras de que quiere construir la paz. Marchaba todo bien hasta que Uribe hizo la denuncia”.

En tanto *The Economist* asegura que el presidente saliente de Colombia se ha convertido en “el peor enemigo de Santos” al “obstaculizar el intento de su sucesor de buscar una reconciliación con el gobierno venezolano”. Y concluye con una sorprendente sugerencia al presidente electo: “Uribe debe entender que al interferir mancha su legado. Santos debería hacer lo mejor posible para persuadirlo de esto y darle un cargo donde no pueda entrometerse. Por ejemplo, de embajador en Beijing.

Tampoco la prensa colombiana ha ocultado su sorpresa. “¿Era necesario?” titula en portada la influyente revista *Semana*. Pese a “los ocho años de convivencia tormentosa entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez”, que oscilaron de las declaraciones de hermandad al umbral de la guerra, “no dejó de sorprender que en el minuto final, cuando Uribe prepara maletas para dejar la Casa de Nariño, se haya producido el golpe de gracia en estas tormentosas relaciones”, dice la nota con la que *Semana* abre su última edición.

En la misma publicación, uno de los más influyentes analistas políticos colombianos, Antonio Caballero, escribe en su columna semanal: “Este sainete de los últimos días que le transmite al presidente electo Santos la papa caliente de la pelea con Chávez no es, como puede parecer, un capricho agónico de Uribe contra su sucesor. Sino un servicio más que les presta a sus amos, como diría el coronel venezolano. Así, el Departamento de Estado norteamericano ya terció para advertir que ‘hay que tomar las acusaciones muy en serio’. Porque muestran lo que había que mostrar: que Chávez es un protector de narcoterroristas. ¿Y para qué son las siete bases cedidas por Colombia? Pues para combatir el narcoterrorismo”. ■





Salir de los números en rojo es la nueva tendencia y los halcones del déficit se han lanzado con todo sobre el presupuesto de Estados Unidos. Ahora atacaron a los subsidios de desempleo.

En última instancia, van tras el sistema de Seguridad Social y Medicare/Medicaid, los venerables programas de cobertura médica que en un momento fueron considerados intocables en la política estadounidense. Estos programas fueron reemplazados por un nuevo intocable: el presupuesto de defensa. Para realmente lidiar con el déficit anual y el aumento de la deuda nacional, entonces, vamos a tener que recortar el gasto militar.

Necesitamos a los justicieros del déficit.

En primer lugar, llamemos a las cosas por su nombre: estamos hablando del “presupuesto de guerra”. El gobierno creó el Departamento de Guerra en 1789, ministerio que recién en 1949 fue renombrado como Departamento de Defensa. El presupuesto de guerra que Barack Obama acaba de enviar al Congreso para el año de ejercicio fiscal 2011 es de 548.900 millones de dólares, con 33.000 millones adicionales, que es el gasto suplementario de 2010 que está siendo actualmente debatido en el Congreso, y 159.300 millones más “para apoyar las actuales operaciones de contingencia en el extranjero, que incluyen fondos para ejecutar la nueva estrategia del presidente en Afganistán y Pakistán”. (Operaciones de contingencia en el extranjero” es el nuevo nombre que el gobierno de Obama le dio a la “guerra global contra el terrorismo”).

Estas cifras incluyen sólo el presupuesto para la guerra disponible al público. También hay un “presupuesto en negro” para operaciones clandestinas, mantenido en secreto, que el ex director de Inteligencia Nacional Dennis Blair reveló es de alrededor 75.000 millones de dólares. Como denunció el *Washington Post*, el aparato de seguridad del Estado post 11 de setiembre ha crecido y se ha transformado en una “empresa” gigantesca, inmanejable y ampliamente privatizada.

Más de dos mil empresas con fines de lucro y más de 85.000 personas con acceso a información secreta están involucradas en actividades militares y de inteligencia, trabajando de manera directa para el gobierno de Estados Unidos, con muy poca o ningún tipo de supervisión.

El congresista Alan Grayson, demócrata de Florida, presentó el proyecto de ley H.R. 5353, denominado “La guerra nos está

EEUU: los justicieros del déficit

Amy Goodman

empobreciendo”. Grayson, con algunos republicanos y un número de copromotores progresistas demócratas, quiere obligar al comandante en jefe Obama a llevar a cabo sus dos guerras con “tan sólo” los 548.900 millones de dólares del presupuesto base. Los 159.300 millones ahorrados serían usados para desarrollar un programa de exenciones impositivas, haciendo que los primeros 35.000 dólares de ingreso personal estén libres de impuestos, y que cualquier sobrante sea destinado al pago de la deuda nacional. El proyecto de ley tiene que ser debatido ahora por el comité correspondiente y podría generar verdadero apoyo de miembros de ambos partidos. Grayson, al momento de presentar el proyecto de ley, destacó un hecho que vale la pena repetir: el presupuesto de guerra de Estados Unidos es mayor que el gasto militar de todas las naciones de la Tierra, tomadas en conjunto.

Mientras tanto, en la Conferencia Nacional por la Paz de Albany, Nueva York, este fin de semana, la gente tendrá como blanco al presupuesto militar. Los estudiantes se están organizando en función de la vinculación entre el gasto destinado a la guerra y los recortes en el presupuesto educativo, generando protestas en las universidades de todo el país. Otra iniciativa, denominada “Traigan nuestros dólares aportados a la guerra de regreso al país”, promueve la acción a nivel de los gobiernos municipales y estatales, junto con campañas de base para presionar a los miembros del Congreso a detener el financiamiento para la guerra.

El costo de la guerra de Irak fue estimado por el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, junto con su colega Linda Bilmes, en tres billones de dólares. En el cálculo se incluyen no sólo los costos directos actuales, sino también el costo que significará para la sociedad asistir a los veteranos de guerra heridos, y los costos a largo plazo de tener tantas familias desestabilizadas por tener que cuidar a los seres queridos que fueron heridos, o por sufrir la pérdida del proveedor del sustento familiar, muerto en la guerra. Y eso sólo en Irak. En mayo, el costo mensual de la guerra de Afganistán superó, por primera vez, el costo de la guerra en Irak.

Stiglitz fue uno de los muchos economistas que dijeron que el paquete de estímulo económico de 787.000

millones de dólares –impulsado por el gobierno de Obama en 2009 para reactivar la economía– era demasiado pequeño. Sostiene que el gasto deficitario, si es gastado en forma inteligente, genera ganancias a largo plazo para una economía. En contraste, escribió recientemente: “Los déficit para financiar guerras o beneficiar al sector financiero [...] imponen una carga a las generaciones futuras”.

El economista Dean Baker, del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), dice que la Comisión de Déficit del presidente Obama es una de las principales causas de esta preocupación. Los copresidentes de la comisión son el ex senador republicano Alan Simpson y el demócrata Erskine Bowles, que forma parte del directorio de Morgan Stanley, una de las empresas rescatadas de Wall Street. Baker me dijo: “El presidente Obama escogió a Alan Simpson, ex senador de Wyoming, que hizo su carrera en base a castigar a los ancianos y cree que eso está bien. No sé si está desvariando o qué, pero habla de cómo los ancianos manejan sus Lexus en los barrios privados. Quizá sus amigos lo hacen. Pero tenemos la información, y muy pocos están en esa situación. Y luego el copresidente demócrata Erskine Bowles, que es un hombre de Wall Street. Gana 300.000 dólares al año como director de Morgan Stanley, una empresa que debería ser conocida por todos, porque hubiera quebrado sin el apoyo de los contribuyentes. Y él, de la nada, dijo: ‘Bueno, vamos a tener que recortar la Seguridad Social’. Entonces, las dos principales personas designadas por el presidente Obama, sus copresidentes, ambos dicen que quieren recortar la Seguridad Social. Esto debería preocupar mucho a la gente. No es una comisión equilibrada”.

Recortar la Seguridad Social no es la solución, la solución es recortar el gasto de guerra y traer a los soldados de regreso. Ésa es la tarea de los justicieros del déficit. ■

Amy Goodman es la presentadora de *Democracy Now!*, un noticiero internacional diario que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Denis Moynihan colaboró en la producción periodística. Traducción: Mercedes Camps. Edición: DN! en Español.

SUNS

South-North Development Monitor

● Finanzas: Comité de Basilea alcanza acuerdo sobre la definición de capital y otras cuestiones clave.

El Grupo de Gobernadores y Jefes del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria llegó el lunes 26 de julio a un acuerdo amplio en particular sobre la definición de capital, el tratamiento del riesgo de crédito de contraparte, el ratio de apalancamiento y el nivel de liquidez global.

El Comité de Basilea dijo en un comunicado de prensa que de sus veintisiete países sólo uno no ha firmado el acuerdo. Si bien no mencionó a ese país, otros medios de comunicación informaron que sería Alemania. (28/7/2010) ■

● Países BASIC reclaman acceso equitativo al espacio de carbono.

Los ministros de los países BASIC -acrónimo que representa el grupo de Brasil, Sudáfrica, India y China- hicieron énfasis en un comunicado conjunto en su cuarta reunión el 25 y 26 de julio en Río de Janeiro en la cuestión del acceso equitativo al espacio de carbono como un elemento central en la construcción de un resultado equilibrado y global para entablar negociaciones sobre el cambio climático.

Los ministros también indicaron que el rápido financiamiento será la clave para un resultado eficaz en las negociaciones sobre el cambio climático en diciembre en Cancún y expresaron su preocupación por la falta de directrices operacionales para la prestación de tales recursos.

Los ministros también dijeron en el comunicado conjunto que ese financiamiento debe ser nuevo y adicional, y siempre en condiciones favorables, respetando las definiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los acuerdos alcanzados en Copenhague. (28/7/2010) ■

● Naciones Unidas investigará ataque israelí a flotilla que transportaba ayuda humanitaria para Gaza.

El presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sihasak Phuanketkeow, nombró a tres expertos independientes que integrarán una misión investigadora para establecer si se violó el derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, como resultado del ataque israelí a la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza.

Los tres expertos son T. Karl Hudson-Phillips (Trinidad y Tobago), Sir Desmond de Silva (Reino Unido) y Mary Shanthi Dairiam (Malasia). (27/8/2010) ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en <http://www.sunsonline.org>

Quizás sólo el aire sea más esencial para la vida del ser humano que el agua. No podemos sobrevivir más de tres días sin agua, mientras que algunas personas han llegado a resistir dos meses sin alimentos.

Si bien la importancia de los alimentos ha sido reconocida y convertida en un derecho humano, no sucede lo mismo todavía con el acceso al agua limpia y segura. Esta omisión fue rectificada ayer por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó por una amplia mayoría el proyecto de resolución presentado por Bolivia y respaldado por otros treinta y tres países para declarar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho de todo ser humano.

La iniciativa boliviana fue aprobada por ciento veintidós de los ciento sesenta y tres países presentes en la Asamblea General y sin votos en contra, aunque los otros cuarenta y uno se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia.

La resolución expresa la profunda preocupación de que ochocientos ochenta y cuatro millones de personas carezcan de acceso al agua potable y que más de 2.600 millones no cuenten con un sistema de saneamiento básico. También porque mueren al año un millón y medio de niños menores de cinco años y se pierden cuatrocientos cuarenta y tres millones de días de clase por enfermedades vinculadas al agua y el saneamiento.

La resolución declara el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento como un derecho humano esencial para el goce pleno del derecho a la vida, y recuerda el compromiso asumido por los gobernantes de todo el mundo a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad, para 2015, la cantidad de personas que no cuentan con acceso a ambos servicios, según se acordó en 2002 en el Plan de Acción de Johannesburgo.

La resolución también exhorta a los estados y organismos

El agua ya es un derecho humano

Martin Khor

internacionales a cooperar con los países en desarrollo mediante la transferencia de fondos y tecnología como forma de sumar esfuerzos para brindar agua y saneamiento seguro, limpio y accesible para todas las personas.

No sorprende que haya sido el embajador de Bolivia, Pablo Solón, quien encabezara la iniciativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Ver recuadro.) El presidente Evo Morales declaró al acceder al gobierno en 2006, en medio de una serie de protestas populares contra la privatización de los servicios de agua, que pasaron a manos de una empresa extranjera: “El agua no puede ser un negocio privado porque se estaría violando los derechos humanos. El recurso agua debe ser un servicio público”.

El agua afecta diariamente las vidas de miles de millones de personas y el mundo necesita una señal clara de que es un tema de la máxima prioridad, dijo Maude Barlow, presidenta del Council of Canadians y asesora principal sobre agua del anterior presidente

de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 nadie podía prever que algún día el agua sería un área de conflicto”, expresó Barlow, una apasionada activista en el tema. “Pero en 2010 no es una exageración decir que la falta de acceso al agua potable es la mayor violación de los derechos humanos en el mundo”.

“Casi dos mil millones de personas viven en zonas con problemas de agua y tres mil millones no tienen agua corriente a un kilómetro de distancia de sus hogares. Cada ocho segundos muere un niño de alguna enfermedad vinculada al agua, en todos los casos prevenible si sus padres hubieran tenido acceso al agua limpia y si hubiera habido un saneamiento adecuado”, agregó.

La situación empeora a medida que el mundo se va quedando sin agua limpia. Un nuevo informe del Banco Mundial dice que para 2030 la demanda mundial excederá el agua disponible en un cuarenta por ciento. Esto, expresó Barlow, es una

predicción terrible que pronostica grandes sufrimientos.

Es así que la iniciativa de hacer del agua un derecho humano es muy oportuna. Más de un tercio de la población mundial ya está enfrentando escasez y, a menos que cambien las tendencias actuales, para 2025 puede llegar a dos tercios. Además, aumentarán conflictos sobre el agua a medida que este recurso se vuelva más escaso.

La escasez de agua tiene numerosas causas. La tala de árboles en las laderas de las montañas y los bosques ha perjudicado las cuencas y erosionado los suelos, encenegando los ríos.

El agua subterránea se ha visto severamente mermada por la agricultura y la industria. Esto ha provocado que las napas hayan bajado en algunas zonas de países como India, China, Rusia y Estados Unidos.

La agricultura utiliza el setenta por ciento del agua porque la agricultura industrial requiere enormes cantidades. Se necesita tres metros cúbicos para producir un kilo de cereal y quince metros cúbicos para producir un kilo de carne vacuna por los granos con los que se alimenta al ganado.

Cinco millones de personas mueren cada año por enfermedades originadas en el agua. Gran parte del agua de la superficie también está contaminada y, por lo tanto, no es apta para el consumo humano o, si se la utiliza, causa problemas de salud.

El agua disponible también se ve afectada por el cambio climático. El calentamiento global está provocando un acelerado derretimiento de los glaciares.

Al adoptar la resolución, las Naciones Unidas están dando una importante señal para que los responsables políticos aborden los factores que han conducido a esta crisis mundial del agua. ■

Martin Khor, fundador de Third World Network (TWN), es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra. Traducción: Raquel Núñez Mutter.

“Los seres humanos somos esencialmente agua”. Con esta afirmación inició su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de la iniciativa presentada por su país para declarar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano el embajador de Bolivia, Pablo Solón.

Los países miembros de las Naciones Unidas que dieron su apoyo para que el acceso al agua sea considerado un derecho humano deben actuar en consecuencia para apoyar financieramente los programas que permitan dotar a la humanidad de este elemento, por ser vital para la vida, dijo Solón.

Aunque la resolución aprobada ayer no es vinculante en el marco del derecho internacional, tiene un alto valor simbólico e influye en la política de las Naciones Unidas y de varios de sus países miembros. ■

AGENDA GLOBAL

Redactor responsable: Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez. (c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / item@item.org.uy

